

**EXPEDIENTE:** TJA/5ªSERA/210/2025

**PARTE ACTORA:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**AUTORIDAD DEMANDADA:** H.  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
JIUTEPEC, MORELOS Y OTROS.

**MAGISTRADO:** JOAQUÍN ROQUE  
GONZÁLEZ CEREZO.

**SECRETARIA DE INSTRUCCIÓN:**  
FERNANDA MARYLE ALONSO  
MARTÍNEZ.

**SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:**  
MA. GUADALUPE OLIVARES VILLA.

Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de mayo del dos mil  
veintiséis.

### 1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

**SENTENCIA** que emite el Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Morelos en sesión del día veintisiete de mayo  
del dos mil veintiséis, respecto de los autos del expediente  
número **TJA/5ªSERA/210/2025** promovido por [REDACTED]  
[REDACTED] en contra del **H. Ayuntamiento Municipal**  
**de Jiutepec, Morelos y Otros**, en la que se declaran

**parcialmente fundadas** las razones de impugnación hechas valer; por ende se **declara la nulidad** de la **omisión** impugnada, y se **condena** a las **autoridades demandadas** al incremento y pago de la pensión por jubilación del demandante por los años dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco y dos mil veintiséis, este cuantificado al mes de mayo, y en suplencia de la deficiencia de la queja el pago de su aguinaldo dos mil veinticuatro con el incremento respectivo, en los términos establecidos en la presente sentencia, con base en los siguientes capítulos:

## 2. GLOSARIO

**Parte actora:**

██████████ ██████████ ██████████.

**Autoridades  
demandadas:**

1) H. Ayuntamiento Municipal  
de Jiutepec, Morelos;

2) ██████████ ██████████ ██████████,  
en su carácter de Presidente  
Municipal de Jiutepec, Morelos;  
y

3) ██████████ ██████████ ██████████  
en su carácter de Tesorero  
Municipal de Jiutepec, Morelos.

**Acto Impugnado:**

*"...1) La incorrecta aplicación de la  
resolución del H. Consejo de  
representantes de la Comisión  
Nacional de los salarios mínimos que  
fija los salarios mínimos general y*

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

profesionales vigentes a partir del primero de enero de dos mil veinticuatro; por parte de la autoridad demandada, por lo cual pretende excluir y dejar de aplicar el porcentaje de aumento a que está obligada a cubrir e incrementar mi pensión (...) La falta de pago del 16% como pago total, por parte de la demandada, respecto del aumento porcentual al salario mínimo para el año 2024; aumento salarial que fue otorgado de acuerdo a la comisión nacional de salarios mínimos a razón del 20% y sin embargo solo he recibido el equivalente al 4% de dicho total y que como pensionados tenemos derecho a percibir, y

2) La omisión y negativa de la debida aplicación de la resolución del H. Consejo de representantes de la Comisión Nacional de los salarios mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del primero de enero de dos mil veinticinco; por parte de la autoridad demandada (...) es decir la falta de pago del 12% como pago total por parte de la demandada, respecto del aumento porcentual al salario mínimo para el año dos mil veinticinco..." (Sic.)

**LJUSTICIAADVMAEMO:** *Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.*<sup>1</sup>

**LORGTJAEMO:** *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5514.

<sup>2</sup> Idem.

**CPROCIVILEM:** *Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos.*

**LSERCIVILEM:** *Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.*

### **3. ANTECEDENTES DEL CASO**

1.- En fecha **catorce de agosto de dos mil veinticinco**, compareció [REDACTED], ante este **Tribunal** a promover juicio de omisión.

2.- Previa subsanación del diecinueve de agosto de dos mil veinticinco, mediante acuerdo del **diez de septiembre de dos mil veinticinco**, se admitió la demanda de juicio de nulidad promovida por [REDACTED] en contra de las **autoridades demandadas**; en la que señaló como **acto impugnado** el especificado en el glosario de la presente resolución.

En consecuencia, se formó el expediente respectivo y se registró en el Libro de Gobierno correspondiente. Con las copias simples, se ordenó emplazar a las **autoridades demandadas** para que dentro del término de diez días produjera contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de ley respectivo.

3. Por acuerdo del **veintitrés de octubre de dos mil veinticinco**, se tuvo por presentadas a las **autoridades demandadas** dando contestación a la demanda instaurada en su contra y con la misma se ordenó dar vista a la **parte actora**

por el plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, anunciándole su derecho para ampliar su demanda en el término de quince días hábiles.

4.- En acuerdos del **diez de diciembre de dos mil veinticinco**, previa certificación, se tuvo por perdido el derecho de la **parte actora** tanto para desahogar la vista respecto de la contestación de la demanda.

5. En auto del **diez de diciembre del dos mil veinticinco**, se le tuvo al demandante por **precluido** su derecho para ampliar su demanda; se abrió el periodo probatorio de cinco días para ambas partes.

6.- El **veinte de enero de dos mil veintiséis** se declaró **precluido** el plazo de la **parte actora** para ofrecer pruebas de su parte y por **admitidas ratificadas** las pruebas de la parte demandada; así mismo y para mejor proveer al momento de resolver, se admitieron las pruebas documentales exhibidas y agregadas a los autos, señalándose fecha para la audiencia de Ley.

7.- Con fecha **trece de febrero de dos mil veintiséis**, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia de Ley, en la que se hizo constar la incomparecencia de las partes, desahogándose las pruebas admitidas en autos, al no haber incidente pendiente de resolver, se apertura la etapa de alegatos, en la que se tuvo a la **autoridad demandada** por presentados los que le corresponden y en tanto a la **parte actora** se le tuvo por perdido su derecho para formularlos;

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

posteriormente se declaró cerrada la instrucción, ordenándose turnar los autos para emitir la sentencia conducente; la que se dicta al tenor de lo siguiente:

#### **4. COMPETENCIA**

Este **Tribunal** es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; 1, 3 de la **LJUSTICIAADVMAEMO**; 1, 18 inciso B) fracción II sub inciso a) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO**.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 176/2009, consideró que las pensiones pertenecen a la materia administrativa, porque si bien es cierto se enmarcaron dentro de las prestaciones de seguridad social y derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también lo es que por regla general, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Precisó, que la pensión no constituye una prestación de tipo laboral como el salario, las vacaciones, el aguinaldo, los vales de despensa, la habitación, los bonos de productividad, los premios por puntualidad, por asistencia, el pago de becas, entre otros, que se otorgan durante la vigencia de la relación de trabajo, sino que se proporcionan después de ella, por los motivos especificados en la ley, y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales, y que el obligado al pago de las pensiones, en el caso que resolvió en esa ejecutoria, era el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado derivado del pago de las cuotas de seguridad social realizadas por las dependencias públicas a favor de sus trabajadores.

Puntualizó, que surge una nueva relación de naturaleza administrativa entre ese instituto y los trabajadores o sus derecho habientes, que se constituye como una relación de autoridad a gobernado, toda vez que ese organismo público puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado.

Tesis de jurisprudencia que es del título y texto siguiente:

**PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.<sup>3</sup>**

<sup>3</sup> Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 166110; Instancia: Segunda Sala; Novena Época; Materias(s): Administrativa; Tesis: 2a./J. 153/2009; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Octubre de 2009, página 94; Tipo: Jurisprudencia  
Contradicción de tesis 176/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Sexto y

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículos 51, 52, 54 y 55, de los que se advierte que para fijar la competencia por materia en los juicios de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado **constituye una nueva relación de naturaleza administrativa**, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, **pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado**. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; **de ahí que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías instaurado en su contra se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en los lugares en que exista esa competencia especial**, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios donde no exista la competencia especializada.

El artículo 1º, de la **LJUSTICIAADVMAEMO**, establece:

*Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución.*

Por lo que, atendiendo a lo dispuesto por ese artículo 1º, en relación con el artículo 18, inciso b), fracción II, inciso a), de la **LORGTJAEMO**, el acto impugnado tiene naturaleza administrativa por provenir de autoridad de esa característica, como son las autoridades demandadas, razón por lo que sus

---

Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de agosto de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: José Antonio Abel Aguilar Sánchez y Óscar Palomo Carrasco.

Tesis de jurisprudencia 153/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de septiembre de dos mil nueve.

actos resultan controvertibles mediante el juicio de nulidad promovido ante este Tribunal.

## 5. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

El demandante señaló como actos impugnados, los siguientes:

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

*"...1) La incorrecta aplicación de la resolución del H. Consejo de representantes de la Comisión Nacional de los salarios mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del primero de enero de dos mil veinticuatro; por parte de la autoridad demandada, por lo cual pretende excluir y dejar de aplicar el porcentaje de aumento a que está obligada a cubrir e incrementar mi pensión (...) La falta de pago del 16% como pago total, por parte de la demandada, respecto del aumento porcentual al salario mínimo para el año 2024; aumento salarial que fue otorgado de acuerdo a la comisión nacional de salarios mínimos a razón del 20% y sin embargo solo he recibido el equivalente al 4% de dicho total y que como pensionados tenemos derecho a percibir, y*

*2) La omisión y negativa de la debida aplicación de la resolución del H. Consejo de representantes de la Comisión Nacional de los salarios mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del primero de enero de dos mil veinticinco; por parte de la autoridad demandada (...) es decir la falta de pago del 12% como pago total por parte de la demandada, respecto del aumento porcentual al salario mínimo para el año dos mil veinticinco..." (Sic.)*

En tanto la existencia de la omisión acusada, queda sujeta al estudio de fondo del asunto, tomando en cuenta su naturaleza, estableciendo si fue legal o no.

## 6. PROCEDENCIA

Las causales de improcedencia, por ser de orden público, deben analizarse preferentemente las aleguen o no las partes;

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 párrafo último de la **LJUSTICIAADVMAEMO**, en relación con lo sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia de aplicación análoga y de observancia obligatoria para esta potestad en términos de lo dispuesto en los artículos 215 y 217 de la *Ley de Amparo*.

**IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.<sup>4</sup>**

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, ce entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la Ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.

Es menester señalar que, si bien los artículos 17 Constitucional, 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el derecho a ésta última y contar con un recurso sencillo y rápido,

---

<sup>4</sup> Tipo de documento: Jurisprudencia, Novena época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Enero de 1999, Página: 13.

o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de nulidad sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí viola esos derechos.

Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijan las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y, decidir sobre la cuestión debatida.

De ahí que las causales de improcedencia establecidas en la **LJUSTICIAADVMAEMO** tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulen, reconoce la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues la obligación de garantizar ese recurso efectivo, no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo.

Las autoridades demandadas denominadas **H. Ayuntamiento Municipal; Presidente Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos;** invocaron las causales de improcedencia, previstas en las fracciones X y XVI del artículo 37, en relación con el artículo

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

12 fracción II inciso a), ambos de la **LJUSTICIAADVMAEMO**, mismos que a la letra disponen:

**Artículo 37.** El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

X. Actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro del término que al efecto señala esta Ley;

XVI. Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.

**Artículo 12.** Son partes en el juicio, las siguientes:

I. ...

II. Los demandados. Tendrán ese carácter:

a). La autoridad omisa o la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal impugnados, o a la que se le atribuya el silencio administrativo, o en su caso, aquellas que las sustituyan;

Porque a su consideración no tienen el carácter de autoridades demandadas, además porque es improcedente que este **Tribunal** conozca del presente juicio, pues se tratan de actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos en los que no se promueva juicio dentro del término que al efecto señala esta Ley; señalando que la prestación reclamada se encuentra prescrita, atendiendo a que se actualiza la hipótesis del artículo 104 de la **LSERCIVILEM**, esto es que la acción prescribe en un año; tomando en cuenta de que si la parte actora consideraba que tenía derecho al incremento salarial del dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco lo debió haber hecho valer dentro del término de quince días, señalando que son extemporáneas y se actualiza la prescripción.

El estudio de los argumentos expuestos por las autoridades por cuanto a que no son responsables del acto

del cual se les acusa; se reserva para hacerlo posteriormente, ya que tienen íntima relación con el fondo del presente asunto.

Respecto a que se trata de actos consentidos, es inaplicable su consideración, porque como se advierte el demandante está haciendo valer la omisión de las **autoridades demandadas** de incrementar su pensión de jubilación, de acuerdo al aumento del salario mínimo en los años dos mil veinticuatro y veinticinco, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 66 de la **LSERCIVILEM** y lo establecido en el punto Tercero del Decreto [REDACTED] publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número [REDACTED] de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] emitido a favor del actor, en términos de los incrementos porcentuales otorgados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos vigentes en esos años; siendo que la omisión se da momento a momento por ser de tracto sucesivo; por ende, no prescribe el derecho a demandar; lo que se apoya en el siguiente criterio:

**RECURSO DE QUEJA EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO LEGAL. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UNA OMISIÓN DE TRACTO SUCESIVO.<sup>5</sup>**

<sup>5</sup> Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2016880, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: XVII.2o.3 K (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2759; Tipo: Aislada.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.  
Queja 46/2017. Mario Humberto Chacón Rojo y Carmen Rosa Gutiérrez Gutiérrez, su sucesión. 28 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Secretario: Víctor Alfonso Sandoval Franco.  
Esta tesis se publicó el viernes 11 de mayo de 2018 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

El artículo 98 de la Ley de Amparo no establece expresamente el plazo para la interposición del recurso de queja en amparo directo cuando se reclama que la autoridad responsable se abstuvo de proveer sobre la suspensión del acto reclamado dentro del plazo legal, pues únicamente prevé en su fracción I, que el término para la interposición del medio de impugnación referido es de dos días hábiles, cuando se trate de la suspensión de plano o provisional. Luego, dicha porción normativa resulta aplicable únicamente para aquellos casos en que la responsable se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada, esto es, cuando se conceda o niegue la suspensión; entonces, es en dicho supuesto en el que las partes, en caso de estar inconformes con la determinación, tendrán dos días hábiles para impugnarlo. En tales condiciones, se colige que el plazo de dos días que establece el artículo en examen, es inaplicable cuando se reclame la omisión de proveer sobre la suspensión dentro del plazo legal, pues se trata de una abstención de la autoridad responsable, y esa omisión es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por ser hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. De ahí que, cuando se esté frente a esta hipótesis, el plazo para interponer el recurso de queja debe ubicarse, por similitud legal, en la fracción II del dispositivo citado, para ser interpuesto en cualquier tiempo; máxime que, de tomar como parámetro un plazo en específico, no habría punto de partida para iniciar su cómputo.

Así mismo, realizado el análisis correspondiente al presente asunto, no se advierte alguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento sobre la cual este Tribunal deba pronunciarse; procediendo al estudio de la acción principal intentada.

## 7. ESTUDIO DE FONDO

### 7. 1 El planteamiento del caso

En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 86<sup>6</sup> de la **LJUSTICIAADVMAEMO**, se procede a hacer la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el presente juicio y que es dilucidar la **legalidad o ilegalidad** del acto

---

<sup>6</sup> **Artículo 86.** Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo alguno; pero deberán ser redactadas en términos claros y precisos y contener:

I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;  
II. ...

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

impugnado, consistente en la omisión de las **autoridades demandadas** de incrementar su pensión por jubilación, de acuerdo al aumento del salario mínimo en los años dos mil veinticuatro y veinticinco, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 66 de la **LSERCIVILEM** y lo establecido en el punto Tercero del Decreto [REDACTED], publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número [REDACTED], de fecha [REDACTED] emitido a favor del actor, en términos de los incrementos porcentuales otorgados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos vigentes en esos años. Así como la procedencia o improcedencia de las pretensiones que demanda el justiciable, las que serán estudiadas con posterioridad al presente capítulo.

En el entendido que el análisis de la legalidad o ilegalidad del **acto impugnado** se efectuará bajo la óptica de las razones de impugnación que hizo valer la demandante, atendiendo la causa de pedir y la suplencia de la queja en términos del siguiente criterio:

**SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. OPERA EN FAVOR DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONFORME AL MARCO DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.<sup>7</sup>**

<sup>7</sup> Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2008449; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Común, Administrativa; Tesis: I.3o.A. J/1 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2394; Tipo: Jurisprudencia.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 904/2013. Isidro Hernández Bárcenas. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretaria: Magdalena Selene Guerrero Núñez.

El artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Norma Fundamental y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas. En ese sentido, el legislador reformó el juicio de amparo con la intención de convertirlo en un mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos del poder público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, para beneficiar notoriamente a determinados sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja o vulnerabilidad social. De ahí que el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que autoriza la suplencia de la queja deficiente en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio, opere respecto de jubilados y pensionados, derivado de la evidente desventaja económica y física que tienen para defenderse, por lo que no es dable otorgarles condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial, pues sería injusto darles el mismo trato que a quienes poseen recursos económicos suficientes para defenderse por sí mismos, ya que por la carencia de éstos o la imposibilidad física para trasladarse no pueden autodefenderse o pagar una defensa adecuada, tomando en consideración que las cantidades que reciben por concepto de jubilación o pensión, en muchas ocasiones no corresponden al salario que percibían cuando laboraban.

## 7.2 Carga probatoria

Como se desprende del acto reclamado previamente señalado, se imputa a las **autoridades demandadas** la

---

Amparo directo 854/2013. Verónica Valle García. 26 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretario: Gustavo Eduardo López Espinoza.

Amparo directo 1085/2013. Agustín Rodríguez Sil. 5 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretaria: Magdalena Selene Guerrero Núñez.

Amparo directo 1088/2013. Guadalupe García Guevara. 12 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretario: Gustavo Eduardo López Espinoza.

Amparo directo 1095/2013. 9 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretario: Gustavo Eduardo López Espinoza.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 2a. XCV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS.", publicada el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 1106.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

omisión de incrementar su pensión por jubilación, de acuerdo al aumento del salario mínimo en los años dos mil veinticuatro y veinticinco, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 66 de la **LSERCIVILEM** y lo establecido en el punto Tercero del Decreto [REDACTED], publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número [REDACTED] de fecha [REDACTED] emitido a favor del actor, en términos de los incrementos porcentuales otorgados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos vigentes en esos años.

En este caso la carga probatoria tiene una relación directa con la naturaleza del acto imputado; así tenemos que para que se configure una omisión es imprescindible que exista un deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación.

La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. Sirve de orientación la siguiente tesis aislada:

**INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.<sup>8</sup>**

Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de actos

<sup>8</sup> Amparo directo en revisión 978/2007. Cirilo Rodríguez Hernández. 4 de julio de 2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Registro digital: 171435. Tipo de tesis: Aislada. Materias(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Tesis: 1a. CXC/2007. Página: 386.

negativos u omisivos. La diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones. De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado no haya llevado a cabo la interpretación a que alude el quejoso en sus agravios, no implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún deber, pues para que exista la obligación de realizar dicha interpretación -en el sentido de establecer los alcances de una norma constitucional-, se requiere que: 1) el quejoso lo hubiese solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de él) es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías.

(Lo resaltado es añadido)

Para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que solo pueden omitirse conductas fácticas y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Es aplicable la siguiente tesis aislada:

**ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO.<sup>9</sup>**

---

<sup>9</sup> 5 Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. Registro digital: 196080, Tipo de tesis: Aislada. Materias(s): Común, Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Tomo VII, Junio de 1998- Tesis: 1a. XXIV/98. Página: 5.

Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, **independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos.** En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, **debe acudir en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica,** porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.

(Lo resaltado no es de origen)

Sentado lo anterior la omisión imputada a las **autoridades demandadas** implica un no hacer o abstención, en detrimento de los derechos del actor. Por lo anterior, la carga de la prueba de acreditar que sí cumplieron, les corresponde a ellas, en términos del criterio que se transcribe:

**ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE LA OMISIÓN.<sup>10</sup>**

En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto es, los que implican un hacer de la autoridad, la carga de la prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en la parte quejosa, ya que es ella quien

<sup>10</sup> TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 360/2010. Susana Castellanos Sánchez. 24 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González Bárcena. Novena Época Núm. de Registro: 162441. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, abril de 2011 Materia(s): Común. Tesis: I.3o.C.110 K. Página: 1195.

afirma el perjuicio que le irrojan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, esto es, la carga de la prueba se revierte a las contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que las autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que se les atribuyen.

(Lo resaltado no es origen)

Siempre que como previamente se estableció exista una norma que los conmine al cumplimiento de lo que se les está reclamando.

### **7.3 Pruebas**

Las autoridades demandadas ratificaron sus pruebas dentro del término concedido para tal efecto, mientras que a la parte actora se le tuvo por precluido su derecho para ofrecerlas; sin embargo, en términos del artículo 53<sup>11</sup> de la LJUSTICIAADVMAEMO, para mejor decisión del asunto, fueron admitidas las documentales exhibidas en autos. Documentales todas, que fueron admitidas al tenor siguiente:

#### **7.3.1 De las autoridades demandadas.**

**1. LA DOCUMENTAL.-** Consistente en el oficio con identificación alfanumérica [REDACTED] de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, suscrito y firmado

---

<sup>11</sup> Artículo 53. Las Salas podrán acordar, de oficio, el desahogo de las pruebas que estimen pertinentes para la mejor decisión del asunto, notificando oportunamente a las partes a fin de que puedan intervenir si así conviene a sus intereses; asimismo, podrán decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que lo estimen necesario. Los hechos notorios no requieren prueba.

por el DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS.

2. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en impresión fotostática en blanco y negro de la Portada y páginas 3,106, 107, 108 y 109 del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número [REDACTED] de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], correspondiente a la sexta época.

3. **LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-** Consistente en todo lo que favorezca a los intereses de la promovente.

4. **LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.-** Consistente en todo lo que favorezca a los intereses de la promovente.

#### 7.3.2 Pruebas para mejor proveer.

1. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en dos Recibos de Nómina a nombre de [REDACTED] [REDACTED], correspondientes a los periodos del:

- Dieciséis de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil veinticinco.
- Primero de junio al quince de junio de dos mil veinticinco.

2. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en impresión fotostática en blanco y negro del Diario Oficial de la Federación, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

veinticuatro, en el cual se publica la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por la cual se fija el salario mínimo correspondiente al año dos mil veinticinco.

3. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en copia certificada constante de una foja útil según su certificación, misma que corresponde a la Constancia Laboral a nombre de [REDACTED] expedida por la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS.

4. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en copia certificada constante de una foja útil según su certificación, misma que corresponde al oficio número [REDACTED] de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, suscrito y firmado por el DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS y el OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS.

5. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en copia certificada constante de una foja útil según su certificación, misma que corresponde al Recibo de Nómina a nombre de [REDACTED] correspondiente al periodo del primero al quince de noviembre de dos mil veintitrés.

6. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en copias certificadas constantes de cuatro fojas útiles según su certificación, mismas que corresponden a los Recibos de Nómina a nombre

de [REDACTED], correspondientes a los periodos del:

- Primero al quince de marzo de dos mil veinticuatro.
- Dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil veinticuatro.
- Dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil veinticinco.
- Primero al quince de febrero de dos mil veinticinco.

7. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en copias certificadas constantes de siete fojas útiles según su certificación, mismas que corresponden al oficio número [REDACTED], de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], suscrito y firmado por el Secretario Municipal de Jiutepec, Morelos.

8. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en copias certificadas constantes de tres fojas útiles según su certificación, mismas que corresponden a los Recibos de Nómina a nombre de [REDACTED] correspondientes a los periodos del:

- Primero al quince de septiembre de dos mil veinticinco.
- Dieciséis al treinta de septiembre de dos mil veinticinco.
- Primero al quince de octubre de dos mil veinticinco.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

9. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en copias certificadas constantes de dos fojas útiles, mismas que no concuerdan con su certificación, las cuales corresponden a los Recibos de Nómina a nombre de [REDACTED], correspondientes a los periodos del:

- Primero al quince de octubre de dos mil veintitrés.
- Primero al quince de noviembre de dos mil veintitrés.

10. **LA DOCUMENTAL.-** Consistente en copias certificadas constantes de noventa y cuatro fojas útiles según su certificación, mismas que corresponden al Expediente de Pensión por Jubilación a nombre de [REDACTED]  
[REDACTED]

Probanzas a las cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 437 primer párrafo<sup>12</sup> del **CPROCIVILEM** de aplicación supletoria a la **LJUSTICIAADVMAEMO** en base a su artículo 7<sup>13</sup>, por tratarse de copias certificadas emitidas por autoridad facultada para tal

---

<sup>12</sup> **ARTICULO 437.-** Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar.

<sup>13</sup> **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

efecto y serán valoradas posteriormente, cuando se aborde el tema con las reclamaciones a que están vinculadas.

#### 7.4 De las razones de impugnación

Las razones de impugnación hechas valer por el actor se encuentran visibles de la foja seis a la ocho del escrito inicial de demanda, los cuales se tienen aquí como íntegramente reproducidas como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias atento al principio de economía procesal, sin que esto cause perjuicio o afecte su defensa, pues el hecho de no transcribirlas en el presente fallo no significa que este **Tribunal** esté imposibilitado para el estudio de las mismas, cuestión que no implica violación a precepto alguno de la **LJUSTICIAADVMAEMO**.

#### CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS<sup>14</sup>.

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.

Razones de impugnación de las sustancialmente se desprende lo siguiente:

<sup>14</sup> SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. **JURISPRUDENCIA** de la Novena Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril de 1998. Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599.

Argumenta el actor que, le causa agravio la omisión de las autoridades en cumplir con el acuerdo [REDACTED] publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con número [REDACTED] de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mediante el cual se le concedió la pensión por jubilación, a razón de una cuota mensual del [REDACTED] afectando su economía, ya que se le está privando de gozar de su salario y prestaciones en los términos concedidos en la pensión.

Señala que la omisión de las autoridades demandadas de dar cumplimiento íntegro al derecho del incremento de su pensión en términos de lo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de forma anual y como lo determina el artículo 66 de la **LSERCIVILEM**, viola sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, puesto que existe una obligación legalmente constituida a cargo de las demandadas, consistente en realizar el pago y aplicar los aumentos porcentuales anuales según el incremento al salario, por lo que, al no hacerlo se le priva de su derecho a percibir pecuniariamente su pensión íntegra conforme al aumento anual que le corresponde.

### **7.5 Contestación de la demanda**

En términos generales, las **autoridades demandadas**, contestaron que resulta inoperante en favor del actor el aumento porcentual que señala, en virtud de que previa aprobación de su acuerdo pensionatorio [REDACTED] es aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo mediante Decreto publicado

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

el **veintisiete de enero de dos mil dieciséis**; razón por la cual el Congreso del Estado de Morelos, mediante Decreto número seiscientos cuarenta y cinco, publicado en el periódico "Tierra y Libertad" número [REDACTED] de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], derogó las disposiciones normativas que se opusieran a dicho Decreto, eliminando con ello las referencias del salario mínimo como cuenta, índice, base, medida o referencia, lo que resulta aplicable a la **LSERCIVILEM**; así en virtud de que los ministros resolvieron que la cuantificación de las pensiones otorgadas por relaciones de carácter burocrático, serán cuantificadas con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.

Refieren que el incremento solicitado no es aplicable a los pensionados y jubilados burocráticos, que únicamente aplica a las relaciones laborales establecidas en el artículo 123 apartado A de la *Constitución Federal*.

Abundan que, en los diversos acuerdos de los años de los años del dos mil diecinueve al dos mil veintitrés dictados por el H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se estableció que los aumentos serían aplicables a los trabajadores regidos por el artículo 123 apartado A de la *Constitución Federal*, quienes a su vez se rigen por la *Ley Federal del Trabajo*.

Agregaron que, dentro de los Acuerdos dictados por el H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en su considerando **SÉPTIMO**, refieren y enfatizan la utilización de los mecanismos referidos en su

resolución de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual fijo los salarios mínimos generales y profesionales que entraron en vigor el primero de enero de dos mil diecisiete, que tipifica que el Monto Independiente de Recuperación (MIR) **no debe ser utilizado como referente para fijar los incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral** (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local, salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales, **salarios para servidores públicos** federales, estatales y **municipales**, y demás salarios del sector formal).

Concluyen que, la categoría que ostentó el demandante no se encuentra dentro de la tipificación establecida por la Comisión referida, pues su relación burocrática con el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, se encuentra prevista en el apartado B del artículo 123 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; además que, la acción que intenta el recurrente, prescribe en el plazo de un año, de conformidad con el artículo 104 de la **LSERCIVILEM**, por lo que ha transcurrido con exceso el plazo otorgado de demandar el pago de dichos incrementos.

## **7.6 Análisis de la contienda**

Antes de entrar al estudio del presente asunto, es oportuno señalar que, el actor en su escrito inicial de demanda había señalado como acto impugnado, la omisión del pago por concepto de vales de despensa mensual a partir de que se le concedió su pensión por jubilación, sin embargo, mediante prevención que le fue realizada, se le solicitó aclarar el acto,

omisión, resolución o actuación de carácter administrativo impugnado, por lo cual, al subsanar la misma, ya no señaló como acto impugnado el señalado en líneas que anteceden, teniéndose como acto impugnado el señalado en el glosario de la presente.

Es importante señalar que, en relación a lo peticionado por el actor, respecto al pago por concepto de vales de despensa, el mismo promovió juicio diverso, mismo que tocó conocer a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas bajo el número de expediente TJA/5ªSERA/JRNF-036/2025, resuelto con fecha once de marzo del año dos mil veintiséis, en el cual se condenó al pago de dicha prestación.

Ahora bien, como se aprecia de los argumentos hechos valer por el justiciable, sostiene que su pensión otorgada debió aumentar en los años dos mil veinticuatro y veinticinco, conforme se incrementó el salario mínimo por el equivalente al 20% (veinte por ciento), y 12% (doce por ciento) respectivamente.

En el caso concreto tenemos que, mediante acuerdo pensionatorio [REDACTED] publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número [REDACTED] de fecha [REDACTED], se concedió pensión por jubilación, a favor de [REDACTED], reconociéndole y otorgándole un porcentaje del 80% del último salario que percibía en forma mensual, debiendo cubrir la pensión correspondiente a partir del día siguiente a la

separación de su cargo; que el monto de pensión se incrementaría de acuerdo con el aumento porcentual salarial mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.

Para lo cual el actor exhibió la documental consistente en copias simples de las páginas 1, 3, 106, 107, 108 y 109, que derivan del ejemplar 6253 del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", documental que incluso al ser publicada en el medio oficial gubernamental del Estado de Morelos, constituye un hecho notorio que no necesita ser probado, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 388<sup>15</sup> del **CPROCIVILEM**.

De donde se desprende, que la pensión concedida a favor del demandante quien se desempeñó como [REDACTED] adscrito a la Dirección de Comunicación Social, sería cubierta por el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; la que se incrementaría de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del Estado de Morelos.

Cabe señalar que las **autoridades demandadas** hicieron valer la **excepción de prescripción** de conformidad con el artículo 104 de la **LSERCIVILEM**, esto es que, el derecho para reclamar el pago del aumento porcentual de pensión, ya se encuentran prescritas, precepto legal que

---

<sup>15</sup> ARTICULO 388.- Valor probatorio de los hechos notorios. Los hechos notorios no necesitan ser probados, y el Juez puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.

establece que las acciones de trabajo que surjan de esta ley **prescribirán en un año.**

Al respecto, es importante mencionar que existen criterios de la corte que refieren que es imprescriptible la acción para ejercitar el derecho a la jubilación, sus incrementos y las diferencias que resulten de éstos; no obstante, tal imprescriptibilidad excluye a los montos vencidos de dichas diferencias, los cuales corresponden a cantidades generadas en un momento determinado y no cobradas cuando fueron exigibles; tal y como lo señala en el siguiente criterio:

**PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN.<sup>16</sup>**

<sup>16</sup> Contradicción de tesis 249/2016. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 15 de febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis XI.1o.A.T. J/9 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIONES Y JUBILACIONES. EL DERECHO AL PAGO DE SUS DIFERENCIAS POR INCREMENTOS ES IMPRESCRIPTIBLE.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo IV, enero de 2016, página 3061, y

El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 1036/2015.

Tesis de jurisprudencia 23/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete.

Nota: Por ejecutoria del 4 de mayo de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inexistente la contradicción de tesis 332/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de marzo de 2017 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las jubilaciones y pensiones, ha sostenido **que es imprescriptible el derecho a reclamar sus incrementos y las diferencias que resulten de éstos; no obstante, tal imprescriptibilidad excluye a los montos vencidos de dichas diferencias, los cuales corresponden a cantidades generadas en un momento determinado y no cobradas cuando fueron exigibles**, por lo que la acción para demandar el pago de las diferencias vencidas sí está sujeta a la prescripción, contada a partir de que éstas fueron exigibles, en términos de la legislación respectiva.

De igual manera, para realizar el análisis de la excepción de prescripción hecha valer por las **autoridades demandadas**, debe tenerse en consideración que resulta ser de explorado derecho que la parte que opone tal excepción debe proporcionar los elementos mínimos que permitan a la autoridad jurisdiccional efectuar el estudio correspondiente, asimismo, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal determinó que, cuando se demanda el pago de prestaciones periódicas, **como pensiones por varios años**, para que la autoridad pueda realizar el análisis respectivo, basta con que el demandado señale que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda, para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la prescripción, sirviendo como criterio orientador, por analogía la jurisprudencia de texto y rubro siguientes:

**PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE OPONE TAL EXCEPCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SU ANÁLISIS.**

Si bien la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada requiere que ésta precise los elementos que permitan a la Junta de Conciliación y Arbitraje realizar el estudio correspondiente, como ocurre con los casos específicos contemplados en los artículos 517 a 519 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de los cuales se deben allegar datos que sólo el demandado conoce, no sucede lo mismo cuando se trata de la regla genérica de prescripción a que alude el diverso artículo 516 de la propia legislación laboral, que opera, entre

otros supuestos, cuando se demanda el pago de prestaciones periódicas, como pensiones por varios años, pues aun cuando subsiste la obligación de proporcionar los elementos que conforman la excepción de prescripción para que la mencionada Junta pueda realizar su análisis, basta con que el demandado señale, por ejemplo, que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la prescripción, con independencia de que se mencione o no el referido numeral 516, puesto que al particular le corresponde decir los hechos y al juzgador el derecho.<sup>17</sup>

No obstante a lo anterior, las **autoridades demandadas**, al oponer la excepción de prescripción, lo realizaron en los términos siguientes:

*“...Se opone la excepción de la prescripción señalada por el artículo 104 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mismo que a la letra dice:*

*Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes.*

*De lo anterior, se considera que ha precluido el derecho del demandante para hacerlo valer con posterioridad, en consecuencia, se debe concluir que es un acto consentido tácitamente, pues la reclamación se ha presentado extemporáneamente y con ello se ha extinguido el derecho para exigir coactivamente su acción ello atendiendo al principio de seguridad jurídica entre las partes, pues ello busca evitar una incertidumbre prolongada indefinida como lo señala el artículo 17 constitucional mismo que refiere que la administración de justicia debe ser impartida dentro de los plazos y términos que fijan las leyes...”*

Como puede advertirse, las **autoridades demandadas** no proporcionaron los elementos mínimos que permitan a esta Autoridad emprender el análisis de la excepción de prescripción, motivo por el cual la misma resulta **improcedente**.

<sup>17</sup> Registro digital: 186747 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 49/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Junio de 2002, página 157 Tipo: Jurisprudencia

Una vez precisado lo anterior y analizadas las constancias que integran el expediente que se resuelve, se llega a la conclusión de que las razones de impugnación hechas valer por la parte actora son **parcialmente fundadas**, de conformidad con lo siguiente:

En primer término, debe decirse que, el decreto de pensión emitido en favor de la **parte actora**, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número [REDACTED] de fecha [REDACTED] como se indicó en el apartado de pruebas de la presente resolución, al ser fuente de derecho constituye un hecho notorio para este **Tribunal**, por lo que con la documental en cita queda debidamente acreditado que:

- Se concedió a la impetrante una pensión por jubilación equivalente al [REDACTED] de su último salario.
- Que el pago de la misma debe realizarse de manera mensual.
- Que la pensión se integrará por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo y,
- Que la pensión deberá incrementar su cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.

En ese sentido, este **Tribunal** verificará si efectivamente se ha actualizado su pensión conforme a los

incrementos sufridos al salario mínimo en los años dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco y dos mil veintiséis, cuantificado este último al mes de mayo por ser la fecha próxima de la emisión de la presente resolución.

Para estar en condiciones de precisar cuál es la cuantía en que debe ser incrementada la pensión de la **parte actora**, es necesario acudir a los artículos 94 y 570 primer párrafo de la *Ley Federal del Trabajo*, numerales que establecen que los salarios mínimos se fijan por una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que puede auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones, dichos salarios los fija cada año y comienzan a regir el primero del siguiente año.

Estos porcentajes son señalados por estas cantidades, atendiendo a que el concepto denominado "Monto Independiente de Recuperación" (MIR), es una cantidad absoluta en pesos, cuyo objetivo es contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general, sin que se aplique como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local, salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales, salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales, y demás salarios del sector informal), aplicable a los

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general.

En lo que respecta al incremento porcentual del año **dos mil veinticuatro**, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, expidió la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinticuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre del dos mil veintitrés<sup>18</sup>. En la que determinó un aumento porcentual del **6%** (aumento por fijación). Para efectos de precisar el porcentaje, solamente se transcribe el punto resolutivo que lo especifica:

**“SEGUNDO.-** En esta ocasión, en términos generales, para efectos de la fijación de los salarios mínimos se integran tres componentes: primero, el monto del salario mínimo vigente a partir del 1º de enero de 2023; segundo, un Monto Independiente de Recuperación (MIR) que se suma al monto del salario mínimo vigente anterior; y, tercero, un factor de aumento por fijación igual a 6.0% que se aplica a la suma del salario mínimo vigente anterior y al MIR.”

Luego entonces, se determina que el incremento porcentual correspondiente a la pensión de la parte actora para el ejercicio **dos mil veinticuatro**, es del **6%**.

Por cuanto al **incremento porcentual del año dos mil veinticinco**, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, expidió la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del

---

<sup>18</sup>[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/875782/Resoluci\\_n\\_SM\\_2024\\_DOF\\_231212.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/875782/Resoluci_n_SM_2024_DOF_231212.pdf)

uno de enero de dos mil veinticinco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre del dos mil veinticuatro<sup>19</sup>. En la que determinó un aumento porcentual del **6.5%** (aumento por fijación). Para efectos de precisar el porcentaje, solamente se transcribe el punto resolutivo que lo especifica:

**“TERCERO.-** Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 2025, se incrementarán en 12% en las dos zonas descritas en el primer resolutivo, por tanto, serán de 419.88 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), cuyo incremento se compone de 19.36 pesos de MIR más un aumento por fijación del 6.5%, y para La Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) el salario mínimo será de 278.80 pesos diarios, por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento se compone de 12.85 pesos de MIR más 6.5% de aumento por fijación. Estos montos serán los que figuren en la Resolución de este H. Consejo, mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores.”

Por tanto, el incremento porcentual correspondiente a la pensión de la parte actora para el ejercicio **dos mil veinticinco**, es del **6.5%**.

Finalmente, con respecto al incremento del dos mil veintiséis, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, expidió la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinticinco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil veinticinco, En la que determinó un aumento porcentual del 6.5% (aumento

19

49[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/962948/Resolucion\\_SM\\_2025\\_DO\\_F\\_241219.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/962948/Resolucion_SM_2025_DO_F_241219.pdf).

por fijación). Para efectos de precisar el porcentaje, solamente se transcribe el tercer resolutivo que lo especifica:

“...TERCERO.- Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 2026, reflejan un incremento de la siguiente manera:

- En 13.0% en la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG), con lo que será de 315.04 pesos por jornada diaria de trabajo; que se compone de 17.01 pesos de MIR más un aumento por fijación de 6.5%.
- En 5.0% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), con lo que será de 440.87 pesos por jornada diaria de trabajo. En este caso no se aplica el MIR.

Estos montos serán los que figuren en la Resolución de este H. Consejo, mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores...”

Por lo que el incremento anual de la pensión para el año dos mil veintiséis, es del 6.5%.

Quedando entonces, los aumentos al salario mínimo de la siguiente manera:

| Año  | Porcentaje |
|------|------------|
| 2024 | 6%         |
| 2025 | 6.5%       |
| 2026 | 6.5%       |

Ahora bien, tomando en cuenta que de acuerdo con la siguiente prueba documental:

**3. LA DOCUMENTAL.-** Consistente en impresión del Comprobante Fiscal por Internet, correspondiente al periodo del primero al quince de noviembre de dos mil veintitrés, a nombre de [REDACTED]

Documental que, al tratarse de impresión de pago a la parte actora, se le confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 490<sup>21</sup> del **CPROCIVILEM**, de aplicación supletoria con fundamento en el artículo 7<sup>22</sup> de la **LJUSTICIAADVMAEMO**, y con sustento por analogía en el siguiente criterio:

**RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL. AUN CUANDO CAREZCAN DE LA FIRMA DEL TRABAJADOR, TIENEN VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO LABORAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**<sup>23</sup>

Las impresiones de los recibos de nómina aportados en el juicio laboral, no pueden valorarse como documentales públicas o privadas si carecen de firma autógrafa para su reconocimiento; sin embargo, deben analizarse en términos del artículo 776, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, como aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, tales como documentos digitales o medios electrónicos, donde habrá de atenderse a la fiabilidad del

<sup>20</sup> Visible en el cuadernillo de datos personales.

<sup>21</sup> Antes referido

<sup>22</sup> Antes referido

<sup>23</sup> Época: Décima Época, Registro: 2016199; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III; Materia(s): Laboral, Tesis: XVII.3o.C.T.3 L (10a.); Página: 1535 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 926/2016. Comercializadora Integral GP, S.A. de C.V. 9 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Ascención Galván Carrizales. Secretario: Jesús Manuel Corral Basurto.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de febrero de 2018 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

método en que fueron generados, como es la cadena de caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, el sello digital o cualquiera que permita autenticar el contenido de dicho documento digital, así como que se encuentre disponible para su ulterior consulta. **Por ello, las impresiones de los recibos de nómina, aun cuando carezcan de la firma del trabajador, siempre que cuenten con el sello digital generado, correspondiente a la cadena de caracteres que permite autenticar la operación realizada, tienen valor probatorio en el juicio laboral, conforme al artículo 99, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que quienes hagan pagos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, deberán expedir y entregar comprobantes fiscales en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los que podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de los numerales 132, fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal del Trabajo.**

(Lo resaltado no es de origen)

De dicha probanza, se desprende que, el salario del actor como activo fue de la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quincenalmente, por lo que, su salario mensual ascendía a la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y en atención al porcentaje de la pensión que le fue otorgada [REDACTED] el monto de la pensión corresponde a la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por lo que se tomará este salario para la cuantificación de la pensión con los incrementos que le corresponden en los años dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco y dos mil veintiséis, esta última cuantificada al mes de mayo.

Siendo estos incrementos los siguientes:

| AÑO  | PORCENTAJE                    |  |  | PENSION CON INCREMENTO |
|------|-------------------------------|--|--|------------------------|
| 2023 | Conforme a su último salario. |  |  | N/A                    |
| 2024 | 6%                            |  |  |                        |
| 2025 | 6.5%                          |  |  |                        |
| 2026 | 6.5%                          |  |  |                        |

Ahora bien, la parte actora debió recibir por concepto de pensión en los años dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco y dos mil veintiséis, este último año cuantificado únicamente hasta el mes de mayo, ya que es el mes en que se resuelve el presente asunto, sin embargo, las autoridades deberán seguir aplicando el incremento señalado para ese año en los meses subsecuentes, siendo los montos señalados a continuación:

| AÑO         | SUELDO MENSUAL CON INCREMENTO | SUELDO ANUAL CON INCREMENTO |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 2024        |                               |                             |
| 2025        |                               |                             |
| 2026 (mayo) |                               |                             |

Cabe señalar que no obra en autos, recibos de pago de la pensión a la parte actora por los años dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco y de los meses de enero a mayo del dos mil veintiséis, por lo que, las autoridades deberán comprobar en ejecución de sentencia, que se realizó el pago de la pensión por jubilación en favor del actor como le correspondía y se señaló en la tabla citada con antelación; o en su caso, cubrirle

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

las diferencias entre estas últimas cantidades que debió recibir, y lo realmente pagado.

Mismas cantidades que deberán respetarse para el cálculo de su aguinaldo de los años dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco a que tiene derecho como pensionado.

Ahora bien, actuando en suplencia de la deficiencia de la queja que se aplica en el presente asunto, el actor en su calidad de pensionado tiene derecho al pago de aguinaldo tal y como lo señala el párrafo segundo del artículo 24 de la **LSEGSOCSP**EM y el párrafo tercero de la **LSERCIVILEM**, mismos que textualmente dicen:

**Artículo 24.** *Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán tomando como base la última remuneración percibida por el Sujeto de la Ley; para el caso de las pensiones por Jubilación y Cesantía en Edad Avanzada, cuando la última remuneración mensual sea superior al equivalente de 600 Salarios Mínimos Vigentes en la Entidad, deberán acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 Salarios Mínimos Vigentes en la Entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley.*

*Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo.*

**Artículo \*66.-** *Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley.*

...

Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.

Siendo procedente el pago de aguinaldo, se cuantificará el mismo por los años dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco de acuerdo al monto ya establecido. En el entendido de lo que establece el artículo 42<sup>24</sup> primer párrafo de la **LSERCIVILEM**, establece que los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado o de los Municipios, tendrán derecho a un aguinaldo anual de noventa días de salario, con la única restricción para los trabajadores que hayan laborado sólo una parte del año, quienes tendrán derecho a la parte proporcional.

Ahora bien, el monto que correspondió al actor, estableciendo el incremento anual para el **año dos mil veinticuatro**, es el equivalente a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mensualmente, por lo tanto, el monto diario de pensión es de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mismo que se debe multiplicar por noventa días de pago, que asciende a la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Respecto al monto que correspondió al actor, con el incremento anual para el **año dos mil veinticinco**, es el equivalente a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mensualmente, por lo tanto, el monto

<sup>24</sup> **Artículo \*42.-** Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado o de los Municipios, tendrán derecho a un aguinaldo anual de 90 días de salario. El aguinaldo estará comprendido en el presupuesto anual de egresos y se pagará en dos partes iguales, la primera a más tardar el 15 de diciembre y la segunda a más tardar el 15 de enero del año siguiente. Aquéllos que hubieren laborado una parte del año, tendrán derecho a recibir la parte proporcional de acuerdo con el tiempo laborado.

diario de pensión es de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mismo que se debe multiplicar  
por noventa días de pago, que asciende a la cantidad de  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

Cálculos realizados con base en las siguientes  
operaciones aritméticas, salvo error de cálculo involuntario:

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Aguinaldo<br>año 2024 | [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]            |
| Aguinaldo<br>año 2025 | [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] |
| Total                 | [REDACTED]                                  |

Cabe señalar que no obra en autos, recibos del pago de  
aguinaldo al actor por los años dos mil veinticuatro y dos mil  
veinticinco, por lo que, las autoridades deberán comprobar en  
ejecución de sentencia, que se realizó el pago del mismo por  
los años señalados en líneas que anteceden en favor del actor  
como le correspondía y se señaló en la tabla citada con  
antelación; o en su caso, cubrirle las diferencias entre estas  
últimas cantidades que debió recibir, y lo realmente pagado.

**7.6.1 Marco normativo**

Como se razonó previamente, para que se configure la  
omisión de las autoridades, es necesario exista la regulación  
que prevea la competencia de éstas de atender o  
cumplimentar en este caso los reclamos del actor.

A continuación, se evidencia el marco legal que vincula a las demandadas **H. Ayuntamiento Municipal; Presidente Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos**; a dar cumplimiento a las pretensiones de la **parte actora**:

De primera instancia se cita lo que a la letra dispuso el acuerdo pensionatorio concedido al actor, [REDACTED] publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número [REDACTED] de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en su artículo segundo:

*"SEGUNDO. La cuota mensual será a razón del 80% del último salario percibido al momento de la separación de su cargo, en virtud de que se acreditó la hipótesis jurídica establecida en el artículo 58, fracción I, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con el cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones. El incremento de la pensión quedará sujeto al porcentaje que se establezca en las condiciones generales de trabajo vigentes." (Sic)*

Asimismo, la *Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos* dispone en los artículos 38 fracción VII, 41 fracciones X, XXXIV, XXXV, XXXVII; 82 fracciones I, II, III, VII, X y XXII, las facultades de las autoridades de mérito al siguiente tenor:

#### **Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos**

**Artículo \*38.-** Los **Ayuntamientos** tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para:

VII.- **Aprobar el Presupuesto de Egresos, del Municipio**, con base en los ingresos disponibles, mismo que contendrá la información que refiere el artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

**Indistintamente, dicho Presupuesto además de contemplar los recursos financieros para el pago de la plantilla de personal autorizada, y de la nómina de pensionistas**, deberá integrar un estimado de los trabajadores y de elementos de seguridad pública, por pensionarse en el respectivo año fiscal.

\*\*\*  
**Artículo \*41.-** El **Presidente Municipal** es el representante político, jurídico y **administrativo** del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones:

\*\*\*  
X. **Ejercer el Presupuesto de Egresos respectivo**, organizar y vigilar el funcionamiento de la administración pública municipal; **coordinar a través de la Tesorería las actividades de programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación del gasto público y autorizar las órdenes de pago**; en términos de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos;

\*\*\*  
XXXIV.- **Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, el otorgamiento de los beneficios de seguridad social** a los trabajadores municipales, a los elementos de seguridad pública o a los deudos de ambos, respecto de **pensiones por Jubilación**, Cesantía por Edad Avanzada, Invalidez y muerte, conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; y en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

\*\*\*  
XXXV.- ...  
Asimismo, con base en los artículos 55, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; y 14, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante el área que para los efectos determine, efectuar los actos de revisión, análisis, diligencias, investigación y reconocimiento de procedencia necesarios, **con la finalidad de garantizar el derecho constitucional al beneficio de jubilaciones y/o pensiones de sus trabajadores.**

XXXVII.- **Garantizar en tiempo y forma, el cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo, mediante los cuales otorga a sus trabajadores**, a los elementos de seguridad pública, o a los deudos de ambos, **el beneficio de pensiones y/o jubilaciones, de acuerdo al procedimiento y los plazos que para tales efectos establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos**; la Ley de Prestaciones de Seguridad social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública; las Bases Generales y Procedimientos para la Expedición de Pensiones y su respectivo Reglamento Interno de Pensiones;

**Artículo \*82.-** Son facultades y obligaciones del Tesorero:

- I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones que se requieran para mejorar la hacienda pública del Municipio;
- II. Proponer y elaborar la política hacendaria y de racionalidad en el manejo de los recursos públicos para aplicarse en todas las áreas de la administración pública municipal;

III. Recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor rendimiento de los fondos municipales;

VII. Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento la información y documentación necesaria, así como el apoyo humano necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos y del proyecto de Ley de Ingresos del Municipio, vigilando que dichos ordenamientos se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables;

X. **Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del Ayuntamiento** y del Presidente Municipal que les sean comunicados en los términos de esta Ley;

XX. Efectuar los pagos presupuestados previo acuerdo del Ayuntamiento, o del Presidente Municipal en su caso;

De la lectura de los textos legales transcritos se puede concluir que, en el Municipio de Jiutepec, Morelos, a quien compete directamente en el cumplimiento de los Acuerdos Pensionatorios es al **H. Ayuntamiento Municipal; Presidente Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos**; entonces a ellos es inherente la omisión de incrementar la pensión de jubilación, concedida al actor.

Consecuentemente es **ilegal la omisión** por parte de las **autoridades demandadas** de realizar el incremento de manera correcta a la pensión por jubilación.

En concordancia con lo analizado, se arriba a concluir que, en el presente caso **se actualiza la hipótesis de nulidad de la omisión de las autoridades demandadas** de incrementar la pensión de jubilación, emitida a favor del actor; consignada en la fracción II del artículo 4, de la **LJUSTICIAADVMAEMO** mismo que a la letra versa:

**Artículo 4.** Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

I. ...

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso;

...

## 8. PRETENSIONES

De las lecturas de las pretensiones de la **parte actora** se desprende que reclama en síntesis lo siguiente:

“... A) el cabal cumplimiento del acuerdo [REDACTED] publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” con número [REDACTED] de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], mediante el cual se concedió pensión por jubilación, [REDACTED] a razón de una cuota mensual del [REDACTED] de las precepciones percibidas al momento de la separación de su cargo, debiendo integrar el pago por concepto de vales de despensa mensual que se encuentra previsto en el artículo 54 fracción IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como la cláusula quinta del convenio de las condiciones generales de trabajo del Honorable Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

B) El pago retroactivo de vales de despensa a razón de dos mil pesos mensuales a partir del mes de septiembre de 2023, así como de los meses que se sigan generando, toda vez que dicha prestación debe ser parte integrante de la pensión por jubilación, otorgada al hoy actor, por el Ayuntamiento demandado a razón de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] hasta la fecha, debiéndose generar el pago por el tiempo que dure el procedimiento y hasta que se de cumplimiento a mi derecho.

C) El reconocimiento expreso por parte del Ayuntamiento demandado, en el sentido de que el pago de vales de despensa a razón de dos mil pesos mensuales, es parte integrante de la pensión por cesantía en edad avanzada otorgada al hoy actor, por el Ayuntamiento demandado.

D) El incremento anual del pago de vales de despensa, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula Quinta del Convenio de las condiciones generales de trabajo para los trabajadores del sindicato único de trabajadores al servicio del Honorable Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y organismos públicos Municipales.

E) La omisión abstención y negativa de las autoridades señaladas demandadas para dar cumplimiento íntegro al derecho del

*incremento de mi pensión en términos de lo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de forma anual, tal y como lo determina el artículo 66 párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, aunado a esto la indebida aplicación de las condiciones generales de trabajo para los incrementos de mi pensión mismas que regulan las relaciones laborales entre la autoridad demandada y sus trabajadores sindicalizados, activos.*

*F) El reconocimiento y aumento de mi pensión en razón del 20% respecto al año 2024 y el 12% por cuanto al 2025..." (Sic)*

Por cuanto a las pretensiones señaladas en los incisos **A), B), C) y D)**, como se señaló en el capítulo que antecede, no obstante de que el actor en su escrito inicial de demanda había señalado como acto impugnado, la omisión del pago por concepto de vales de despensa mensual a partir de que se le concedió su pensión por jubilación, sin embargo, mediante prevención que le fue realizada, se le solicitó aclarar el acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo impugnado, por lo cual, al subsanar la misma, ya no señaló como acto impugnado el señalado en líneas que anteceden, teniéndose como acto impugnado el señalado en el glosario de la presente.

Es importante señalar que, en relación a lo peticionado por el actor, respecto al pago por concepto de vales de despensa, el mismo promovió juicio diverso, mismo que tocó conocer a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas bajo el número de expediente TJA/5ªSERA/JRNF-036/2025, resuelto con fecha once de marzo del año dos mil veintiséis, en el cual se condenó al pago de dicha prestación.

Respecto a las prestaciones señaladas con los incisos **E) y**

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

F), las mismas resultaron procedentes en términos de lo dilucidado en el capítulo que antecede.

9. EFECTOS DEL FALLO

9.1 Son **parcialmente fundadas** las razones de impugnación hechas valer por el actor.

9.2 Se declara la **ilegalidad** de la **omisión** por parte de las **autoridades demandadas H. Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, Morelos; Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos**, de efectuar debidamente el incremento de la pensión por pensión por jubilación de la **parte actora**; por ende, **se declara la nulidad del acto impugnado**.

9.3 De conformidad a la presente sentencia, se condena al **H. Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, Morelos; Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos**, al pago del monto de la pensión que corresponde con su respectivo incremento por los años dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco y dos mil veintiséis, este cuantificado al mes de mayo, asimismo, el pago de aguinaldo por los años dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco, siendo estas las siguientes:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Monto de pensión año 2024 | ██████████ |
| Monto pensión año 2025    | ██████████ |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Monto pensión año 2026<br>(01 enero al 31 de mayo) |  |
| Aguinaldo año 2024                                 |  |
| Aguinaldo año 2025                                 |  |
| Total                                              |  |

Por lo que, las autoridades deberán comprobar en ejecución de sentencia, que se realizó el pago de la pensión por jubilación en favor del actor como le correspondía y se señaló en la tabla citada con antelación; o en su caso, cubrirle las diferencias entre estas últimas cantidades que debió recibir, y lo realmente pagado.

Las cantidades que resultaron procedentes deberán ser enteradas por medio de transferencia a la Cuenta de Cheques BBVA Bancomer: 0121613375, Clabe interbancaria BBVA Bancomer: 012540001216133755 a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, RFC: TLC000901BX2, señalándose como concepto el número de expediente **TJA/5ªSERA/210/2025**; comprobante que deberá remitirse al correo electrónico oficial: [fondoauxiliar.depositos@tjmorelos.gob.mx](mailto:fondoauxiliar.depositos@tjmorelos.gob.mx), y exhibirse ante la Sala del conocimiento de este Tribunal, con fundamento en lo establecido en el artículo 88 apartado B<sup>25</sup> del *Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de*

<sup>25</sup> **Artículo 88.** Además de los considerados en el artículo 44 de la Ley Orgánica, son recursos del Fondo Auxiliar los siguientes:

B. Recursos ajenos, constituidos por depósitos en efectivo, transferencia electrónica, depósito bancario o en valores, que por cualquier causa y mediante la exhibición del certificado de depósito correspondiente se realicen o se hayan realizado ante las Salas.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

*Morelos*. Debiendo la parte actora exhibir su constancia de situación fiscal.

#### **9.4 Término para cumplimiento**

Se concede a las autoridades responsables **H. Ayuntamiento, Presidente Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos**, un término de **diez días hábiles** para que den cumplimiento voluntario a lo ordenado en el presente fallo, una vez que cause ejecutoria; apercibidos que, de no hacerlo así, se procederá a la ejecución forzosa en términos de lo dispuesto por los artículos 90<sup>26</sup> y 91<sup>27</sup> de la **LJUSTICIAADVMAEMO**.

Al cumplimiento de este fallo están obligadas las autoridades, que aún y cuando no han sido demandadas en el

---

<sup>26</sup> **Artículo 90.** Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle cumplimiento en la forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo saber a la Sala correspondiente dentro de un término no mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo la autoridad no cumpliera con la sentencia, la Sala, le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas cumplimente el fallo, apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una de las medidas de apremio prevista en esta ley.

<sup>27</sup> **Artículo 91.** Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente:

I. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de la demandada;

II. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y esta tuviere superior jerárquico, la Sala requerirá a su superior para que ordene la complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley;

III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y

IV. Para el debido cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de la fuerza pública.

Ningún expediente podrá ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado la sentencia y publicado la versión pública en la Página de Internet del Tribunal.

presente juicio, por sus funciones deban intervenir en el cumplimiento de esta sentencia.

En aval de lo afirmado, se invoca la siguiente tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguientes:

**AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.<sup>28</sup>**

Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.

La condena de las prestaciones que resultaron procedentes, se hace con la salvedad de que se tendrán por satisfechas, aquellas que dentro de la etapa de ejecución la autoridad demanda acredite con pruebas documentales fehacientes que en su momento fueron pagadas al actor.

Lo anterior, con la finalidad de respetar los principios de congruencia y buena fe guardada que debe imperar entre las partes, pues si la demandada aporta elementos que demuestren su cobertura anterior a las reclamaciones de la **parte actora**, debe tenerse por satisfecha la condena impuesta, pues de lo contrario se propiciaría un doble pago, lo que está prohibido por la ley.

<sup>28</sup> Época: Novena Época; Registro: 172605; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 57/2007; Página: 144.

Ello guarda congruencia con lo establecido en el artículo 715 del **CPROCIVILEM** de aplicación complementaria a la **LJUSTICIAADVMAEMO**, el cual en la parte que interesa establece:

**ARTICULO 715.-** Oposición contra la ejecución forzosa. Contra la ejecución de la sentencia y convenio judicial no se admitirá más defensa que la de pago...

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto en los artículos 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; los artículos 1, 18 inciso B fracción II sub inciso a) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO** 1, 3, 85 y 86 de la **LJUSTICIAADVMAEMO**, es de resolverse, al tenor siguiente.

#### **10. PUNTOS RESOLUTIVOS**

**PRIMERO.** Este **Tribunal** es competente para conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en capítulo cuatro de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Son **parcialmente fundados** los argumentos hechos valer por la parte actora.

**TERCERO.** Se declara la **ilegalidad** de la **omisión** por parte de las autoridades demandadas **H. Ayuntamiento, Presidente Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos**, de efectuar los incrementos y pago de manera correcta a la pensión por jubilación de la **parte actora** y por ende, **se declara la nulidad del acto impugnado.**

**CUARTO.** De conformidad a la presente sentencia, se **condena** a las autoridades demandadas **H. Ayuntamiento, Presidente Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos**, al pago de la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] correspondiente al desglose señalado en el sub capítulo **9.3** de la presente resolución.

**QUINTO.** Las autoridades demandadas deberán dar debido cumplimiento a la presente sentencia de acuerdo al sub capítulo **9.4**.

**SEXTO.** En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

## 11. NOTIFICACIONES

**NOTIFÍQUESE** a las partes, como legalmente corresponda.

## 12. FIRMAS

Así por unanimidad de seis votos lo resolvieron y firmaron los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ante la excusa calificada de legal de la Magistrada **KARLA SOCORRO REYES REYES**, Titular de la Sexta Sala de Instrucción; Magistrado Presidente **GUILLERMO ARROYO CRUZ**, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrada **MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO**, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrada

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

**VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS**, Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Magistrado **MANUEL GARCÍA QUINTANAR**, Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Magistrado **JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO**, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Ponente en el presente asunto; y Magistrada **CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR**, Titular de la Séptima Sala de Instrucción; ante **ANABEL SALGADO CAPISTRÁN**, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.**

  
**MAGISTRADO PRESIDENTE**

**GUILLERMO ARROYO CRUZ**

**TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN**

**MAGISTRADA**

  
**MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO**

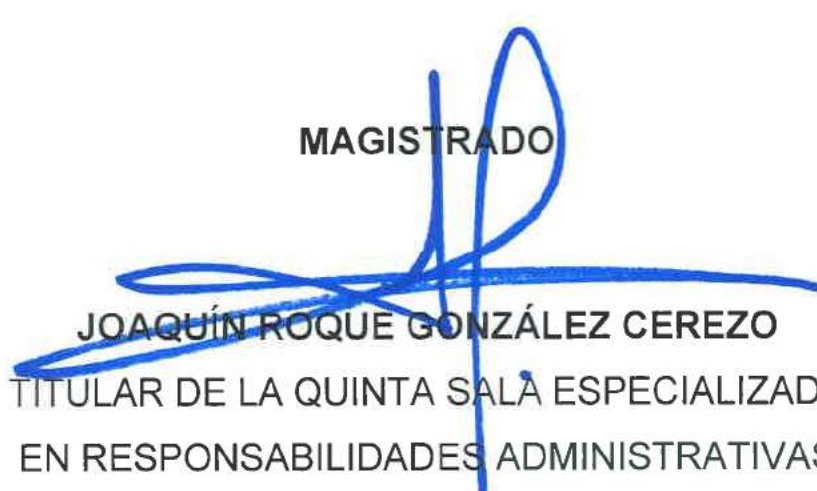
**TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE INSTRUCCIÓN**

  
MAGISTRADA

**VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS**  
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

  
MAGISTRADO

**MANUEL GARCÍA QUINTANAR**  
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA  
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

  
MAGISTRADO

**JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO**  
TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA  
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

**MAGISTRADA**

*Castor*

**CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR**

**TITULAR DE LA SÉPTIMA SALA DE INSTRUCCIÓN**

**SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS**

**ANABEL SALGADO CAPISTRÁN**

**ANABEL SALGADO CAPISTRÁN**, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: Que estas firmas corresponden a la resolución emitida por este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente número **TJA/5ªSERA/210/2025**, promovido por [REDACTED] contra actos del **H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS Y OTROS**, misma que es aprobada en Pleno de fecha veintisiete de mayo del dos mil veintiséis. **CONSTE.**

Mgov\*